



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-019-2014-01429-01
Demandante: Gabriel de Jesús Murillo García
Demandado: Positiva Compañía de Seguros S.A. y Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP
Asunto: Apelación y consulta Sentencia
Procedencia: Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín
M. ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Compatibilidad pensión invalidez profesional y pensión vejez, intereses moratorios.

Medellín, febrero veintisiete (27) de dos mil veinticuatro (2024)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y aprobado el proyecto propuesto por la magistrada ponente, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes, e impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la UGPP, respecto de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2023 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor

Gabriel de Jesús Murillo García contra Positiva Compañía de Seguros S.A., al cual se ordenó la vinculación de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, conocido con el Radicado Nacional 05001-31-05-019-2014-01429-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

EL señor Gabriel de Jesús Murillo García instauró demanda ordinaria laboral contra de Positiva Compañía de Seguros S.A., pretendiendo se declare que la prestación económica de pensión de vejez que le viene cancelando Colpensiones es compatible con la pensión por invalidez de origen profesional que debe continuar cancelando Positiva Compañía de Seguros S.A., por tener causas totalmente diversas, en consecuencia, se condene a la entidad al reconocimiento y pago del retroactivo pensional, desde la fecha en que suspendió el pago, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.

En respaldo de tales pedimentos se expuso que al señor Gabriel de Jesús Murillo García le fue concedida pensión de invalidez de origen profesional mediante Resolución 01322 de 1981 emitida por el extinto Instituto de los Seguros Sociales, igualmente, es pensionado por vejez por parte de Colpensiones, agregando que Positiva Compañía de Seguros S.A. suspendió el pago de la prestación al accionante de manera arbitraria, argumentando que esta es incompatible con la pensión de vejez. (doc.01, carp.01).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, **Positiva Compañía de Seguros S.A.** admitió como cierto que al demandante le fue reconocida la pensión de invalidez de origen profesional mediante Resolución 01322 de 1981, no constándole a la entidad el reconocimiento de la pensión de vejez, ni las razones por las cuales el Instituto de

Seguros Sociales en liquidación suspendió la pensión de invalidez profesional, aduciendo que el hecho de que se afirme que en la actualidad se encuentra disfrutando pensión de vejez, es prueba de que siguió laborando, por lo cual la prestación reconocida por riesgos laborales pudo haber finalizado en atención a una recuperación posterior, no siendo cierto que hubiera sido Positiva Compañía de Seguros S.A., quien suspendiera el pago de la prestación económica.

De consiguiente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y de mérito propuso las excepciones que denominó incompatibilidad entre pensión de vejez y pensión de invalidez de origen profesional; inexistencia de la obligación; prescripción; falta de causa para pedir; sostenibilidad financiera del sistema; imposibilidad de condena a la aseguradora frente a mesadas retroactivas; intereses de mora; costas y agencias en derecho en caso de una improbable condena: falta de reclamación administrativa y la genérica o innominada. (págs. 34 a 43 doc.01, carp.01)

Por su parte, la **Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP**, aceptó como cierto el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional, aclarando que tal prestación fue suspendida por solicitud expresa del demandante, no constándole el reconocimiento de la pensión de vejez.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; pago y compensación; violación al principio de legalidad; buena fe; prescripción e imposibilidad de condena en costas. (doc.27, carp.01)

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 13 de diciembre de 2023, declaró que la pensión de invalidez de origen profesional reconocida al señor Gabriel de Jesús Murillo García, es compatible con la pensión de vejez de origen común otorgada por Colpensiones,

consecuencialmente ordenó a la UGPP proceda a reactivar el pago de la pensión de invalidez de origen profesional al demandante, reconociendo y pagando la suma de \$136.982.100, por concepto de retroactivo pensional entre el 24 de octubre de 2011 y el 30 de noviembre de 2023, autorizando el descuento del porcentaje correspondiente con destino al sistema de seguridad social en salud; condenó a la UGPP a continuar cancelando al actor una mesada pensional equivalente a \$1.160.000 a partir del 1° de diciembre de 2023, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar, así como al pago de la indexación de las mesadas pensionales; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de octubre de 2011; ordenó a Positiva Compañía de Seguros S.A., que proceda con el traslado del valor de la reserva que corresponda al cálculo actuarial para el asunto, con destino a la UGPP, a efectos de financiar el pago de la pensión, conforme lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 4 del Decreto 1437 de 2015; absolvió a las demandadas de las demás pretensiones y condenó en costas a las entidades accionadas (doc.44, carp.01).

1.4.- RECURSOS

El apoderado del señor **Gabriel de Jesús Murillo García** manifestó inconformidad parcial con el fallo, respecto la absolución de los intereses moratorios, considerando que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es posible impartir condena por este concepto, aunque la prestación se hubiese causado con precedencia a la Ley 100 de 1993, pues en la sentencia C601 de 2000, se indica la correcta interpretación del artículo 141 de la Ley 100, tesis que también fue sostenida en sentencia SU065 de 2018, agrega que la mora se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, debiéndose liquidar el intereses desde la primera mesada, por lo que solicita la modificación de la sentencia y se ordene el reconocimiento de los referidos intereses desde el 14 de octubre de 2011. (minuto 00:51:06 a 00:56:54 doc. 43, carp. 01)

Por su parte, el apoderado de **Positiva Compañía de Seguros S.A.**, interpone recurso en relación al numeral 7° de la sentencia, en el entendido de que Positiva debe hacer un cálculo actuarial, toda vez que los dineros que se encontraban en el haber de Positiva fueron trasladados desde el año 2015 a la UGPP; por lo que no hay lugar a ordenar realizar ningún cálculo: En igual sentido, solicita se revoque la condena en costas, teniendo en cuenta que el actuar de la entidad en el presente proceso se hace de buena fe, el demandante presentó de manera libre y voluntaria renuncia a la prestación de invalidez ante Positiva, pero no por exigencia de Positiva sino por una exigencia para el momento de la prestación pensional de vejez, en ese orden de ideas el actuar de la entidad se ajustó para el año 2008 a la ley, no existiendo un obrar de mala fe (minuto 00:57:30 a 01:00:04 doc. 43, carp. 01)

Finalmente, la apoderada de la **Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP**, impetró recurso en relación con la condena en costas, sosteniendo que solo en la sentencia a la UGPP se le atribuye la obligación de reconocer y pagar una prestación económica, que siempre ha obrado de buena fe y hasta la fecha de la diligencia se da la orden de cumplir la obligación, debiéndose tener en cuenta que la entidad fue vinculada al proceso porque inicialmente la demandada fue Positiva S.A., por lo que no debió ser condenada en costas. (minuto 1:00:12 a 1:00:54 doc. 43, carp. 01)

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, no se pronunció ninguna de las partes.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad social, respectivamente.

Igualmente, procede el grado jurisdiccional de consulta en favor de la **Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP**, en los puntos que no fueron objeto de alzada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Gabriel de Jesús Murillo García nació el 28 de mayo de 1953 (pág.21, doc.01, carp.01).
- Que al actor le fue reconocida la pensión de invalidez de origen profesional por el extinto Instituto de los Seguros Sociales, mediante Resolución N° 01322 del 14 de diciembre de 1981, a partir del 3 de diciembre de 1980 (pág.18-19 doc.01, carp.01).
- Que el pretensor fue retirado de nómina de pensionados por Positiva Compañía de Seguros S.A., a partir de julio de 2009, anualidad para la cual venía recibiendo una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal (págs.141 y 143 doc.01, carp.01).

- Que el señor Murillo García, solicitó a Positiva Compañía de Seguros S.A., la reactivación de la pensión de invalidez de origen profesional el 2 de febrero de 2011 y el 14 de octubre de 2014, recibiendo respuesta negativa de la entidad, el 9 de febrero de 2011 y el 22 de octubre de 2014 (págs.14 - 17 doc.01, carp.01 y 33-38, 45-47 doc.24, carp.01).
- Que el demandante percibe prestación económica de vejez por parte de Colpensiones E.I.C.E., según se informó en los hechos de la demanda.

2.3.- PROBLEMA JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajusta a derecho la sentencia objeto de apelación y consulta, determinando para tal fin, si la pensión de invalidez de origen profesional reconocida al actor mediante Resolución 01322 de 1981, es compatible con la pensión de vejez, en caso afirmativo, si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

¿Si hay lugar a revocar la orden impuesta a Positiva Compañía de Seguros S.A., consistente en trasladar a la UGPP, el valor de la reserva actuarial?

¿Si procede revocar la condena en costas a cargo de las entidades accionadas?

2.4.- TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) es compatible la pensión de invalidez de origen profesional con la pensión de vejez que percibe el señor Gabriel de Jesús Murillo García, ii) no siendo procedente el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, iii) encontrándose ajustada la orden impuesta a Positiva Compañía de Seguros de trasladar el valor de la reserva actuarial para el financiamiento de la

prestación reactivada y la condena en costas a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A., no así las impuestas a la UGPP, en razón de ello, la sentencia de primera instancia será revocada parcialmente en el numeral noveno, modificada respecto el valor del retroactivo a reconocer y confirmada en los demás.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

Teniendo en cuenta que el punto central de debate de la presente litis consiste en determinar si la pensión de invalidez de origen profesional que le había sido reconocida al señor Gabriel de Jesús Murillo García por parte del extinto Instituto de los Seguros Sociales, es compatible con la pensión de vejez que en la actualidad percibe de Colpensiones, es necesario señalar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de sentencia con radicación 33558 del 1º de diciembre de 2009, iterada en la sentencia radicado 33265 del 23 de febrero de 2010, ha sostenido pacíficamente que la pensión de invalidez de origen profesional es compatible con la pensión de vejez, teniendo en cuenta que dichas prestaciones amparan contingencias diferentes, contando con fuentes de financiación distintas, cotizaciones diversas y reglamentaciones desiguales, al respecto, se indicó en la última de las providencias referenciadas:

”las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional o en su defecto la de sobrevivientes de origen profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común -o con éstas sustituidas en sus causahabientes-, por cuanto las primeras provienen de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las segundas se derivan de un riesgo común, la cual como lo ha sostenido esta Sala, no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador; asimismo, éstas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo”.

Postura que ha sido confirmada, entre otras, en sentencias SL12155 de 2015, SL17780 de 2017, SL2030 de 2020, SL5019 de 2020, SL3869 de 2021, SL169 y SL2151 de 2023, en adición a las referenciadas por el a quo.

En igual sentido, respecto del alcance de la prohibición de percibir en forma simultánea pensiones de invalidez y de vejez, contenida en literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que sustentó la tesis de incompatibilidad, indicó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en sentencia SL3869 de 2021, lo siguiente:

“En cuanto a que el artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 prohíbe devengar simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, precisa la Sala que dicha regla tiene aplicabilidad en el marco del sistema general de pensiones. Nótese que el artículo que incorpora ese enunciado define las características del sistema general de pensiones, de manera que lo que allí se prohíbe es que una persona devengue al mismo tiempo una pensión de invalidez de origen común y una de vejez, lo que en modo alguno significa que una persona inválida no puede trabajar, como lo afirma Positiva S.A. en su recurso. Nada impide que un pensionado por invalidez de origen común se reincorpore al mundo laboral y realice aportes con la pretensión de reemplazar su prestación por una de vejez que le brinde mejor bienestar y más calidad de vida”.

Conforme a lo anterior, es claro que le asiste el derecho al accionante a la reactivación de la pensión de invalidez de origen profesional y que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, la entidad llamada a responder por tal obligación, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1437 de 2015.

En igual sentido, encuentra procedente la Sala, confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto ordenó a Positiva Compañía de Seguros S.A., trasladar a la UGPP el valor de la reserva del cálculo actuarial correspondiente para la financiación de la pensión del actor, ello teniendo en cuenta que el artículo 4 del Decreto 1437 de 2015, dispone:

ARTÍCULO 4º. Traslado de reservas. *Positiva Compañía de Seguros S. A., trasladará el 1º de julio de 2015, con valoración a 30 de junio de 2015, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Cuenta Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep), los recursos correspondientes a las inversiones de la reserva matemática con corte a 31 de diciembre de 2014 de la nómina de pensionados cuyos derechos fueron causados en el Instituto de Seguros Sociales. Los recursos representados en títulos valores se trasladarán*

por su valor a precios de mercado, valorados conforme al procedimiento establecido por las normas de contabilidad aplicables.

Positiva Compañía de Seguros S. A., deberá asegurar que las inversiones de las reservas que mantiene en su poder, después de efectuar el traslado de que trata el presente artículo, tienen el grado de liquidez adecuado para respaldar las obligaciones que mantiene como administradora de riesgos laborales.

PARÁGRAFO 1º. *El valor de la reserva que corresponde a los cálculos actuariales adicionales que sea necesario efectuar por los derechos pensionales que no se encuentren incluidos en el cálculo actuarial inicialmente aprobado y de fallos judiciales de procesos que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, será trasladado por Positiva Compañía de Seguros S. A., a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), en la medida en que los cálculos actuariales sean aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de financiar el pago de las pensiones en los valores a que haya lugar. Para el efecto, Positiva Compañía de Seguros S. A., presentará el cálculo adicional que se requiera.”*

Advirtiéndole que si bien el apoderado de Positiva Compañía de Seguros S.A., refirió que la entidad trasladó la totalidad de recursos a la UGPP en el año 2015, dicha manifestación no cuenta con soporte probatorio de alguno, no obstante, en caso de que se hubiera trasladado la totalidad de recursos, Positiva Compañía de Seguros S.A., podrá acreditar tal situación ante la UGPP.

Ahora, bajo la égida de la consulta que se surte en favor de la UGPP; procede la Sala a revisar la liquidación del retroactivo pensional efectuada por el cognoscente de primera instancia, para lo cual se tiene presente, como valor de la mesada pensional el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, por cuanto se acreditó que era dicho monto el que venía percibiendo el accionante para el año 2009 al momento de ser suspendida la prestación, así mismo, que se vieron afectadas por el fenómeno prescriptivo las mesadas pensionales con anterioridad al 24 de octubre de 2011, en tanto que la reclamación administrativa se surtió el 2 de febrero de 2011 y la demanda fue radicada el 24 de octubre de 2014.

Efectuados los cálculos correspondientes, se tiene que el retroactivo pensional a reconocer, asciende a \$132.163.718, suma que es inferior a la ordenada por el juzgado, que lo fue de \$136.982.100, evidenciándose que en primera instancia se incurre un error en la liquidación, al tener presente 12.23 mesadas para el año 2011, cuando realmente debió tenerse en cuenta únicamente 3 meses, 7 días, en vista a la prescripción declarada, por lo que se hace necesario modificar el numeral tercero del fallo consultado.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2011	3,73%	3m, 7 d	\$ 535.600	\$ 1.732.006
2012	2,44%	14	\$ 566.700	\$ 7.933.800
2013	1,94%	14	\$ 589.500	\$ 8.253.000
2014	3,66%	14	\$ 616.000	\$ 8.624.000
2015	6,77%	14	\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	13,12%	14	\$ 1.000.000	\$ 14.000.000
2023	9,28%	13	\$ 1.160.000	\$ 15.080.000
2024			\$ 1.300.000	\$ -
			TOTAL	\$ 132.163.718

De los intereses moratorios.

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 regula la causación de los intereses moratorios de la siguiente manera:

“INTERESES DE MORA. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

En este punto, advierte la Sala que la Corte Constitucional en sentencia C601 de 2000 y SU065 de 2018, señaló la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en los eventos de mora en el pago de las mesadas pensionales, con independencia del tipo de pensión y el momento en el cual se haya reconocido el derecho, no obstante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral ha sostenido que en casos como el que hoy se analiza no procede la condena a intereses moratorios, toda vez que la prestación del demandante se reconoció con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, recordando que la normatividad bajo la cual se ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional es la correspondiente al Acuerdo 155 del 1963, aprobado por Decreto 3170 de 1964.

Sobre el particular, en sentencia con radicación 40560 del 13 de febrero de 2013, al estudiarse un asunto similar al ahora debatido, sostuvo la alta Corporación:

“En cuanto a la pretensión de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se encuentra que no hay lugar a ellos, pues conforme a la jurisprudencia sobre este punto, los mismos no se causan tratándose de una prestación ajena al Sistema de Pensiones de la Ley 100 de 1993, como lo es la de invalidez profesional del demandante concedida en los términos del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964 (folio 31), por tanto, se absolverá por esta reclamación”.

Y si bien posteriormente la Sala de Casación, amplió el ámbito de aplicación de los intereses respecto a otras pensiones de orden legal, mantiene la restricción en torno a que se trate de pensiones reconocidas con posterioridad a la Ley 100 de 1993, sobre este punto en sentencia SL1681 de 2020, se indicó:

“Sin embargo, tal criterio fue rectificado recientemente, para en su lugar señalar que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones. En tal oportunidad, la Sala explicó que las pensiones adquiridas en virtud del régimen de transición, son prestaciones que hacen parte del sistema general de pensiones y, en esa medida, los pensionados tienen derecho a obtener las prestaciones y beneficios derivados de este”.

Posición que se iterado entre otras, en sentencias SL607 y SL2179 de 2021 y SL198 y SL1606 de 2022, razón por la cual, no es posible atender el reparo formulado por el apoderado del actor, debiéndose imprimir confirmación al fallo en este punto.

Por último, resulta acertada la condena a la indexación de las mesadas pensionales, teniendo en cuenta que la misma constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, toda vez que en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo, por lo que se confirmará también en este punto la sentencia.

De la condena en costas.

El numeral 1° del artículo 356 del Código General del Proceso prevé

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.

La disposición normativa en cita, aplica el *dictum* romano, según el cual, quien ha sido vencido en un proceso judicial, debe pagar al vencedor los gastos del juicio, y justo en ese sentido, la doctrina ha dicho que:

“... las costas equivalen a la carga económica que debe afrontar quien no tenía razón [en el juicio] motivo por el cual obtuvo decisión desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, o sea el pago de los honorarios de abogado que la parte gananciosa efectuó, y a la que deben ser entregados” [Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo I, p. 1032].

En igual sentido, la Corte Constitucional precisó que el ordenamiento procesal:

“... adoptó un criterio objetivo en lo relativo a la condena en costas: se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, independientemente de las causas del vencimiento. No entra el juez, por consiguiente, a examinar si hubo o no culpa en quien promovió el proceso, recurso o incidente, o se opuso a él, y resultó vencido.” (C-480 de 1995).

Así las cosas, se tiene que en principio se exhibe acertada la condena en costas en la forma dispuesta por el a quo, no obstante, a juicio de la Sala, en el caso particular, resulta procedente revocar la condena en costas impuesta a cargo de la UGPP, ello teniendo en cuenta que fue en su momento Positiva Compañía de Seguros S.A., quien dispuso la suspensión del pago de la pensión de invalidez de origen profesional al actor, y si bien es cierto, previo a ello, el propio demandante presentó solicitud de suspensión del pago, atendiendo a la exigencia realizada por el SENA, para el disfrute de la pensión de jubilación, lo cierto del caso, es que el pretensor radicó dos solicitudes ante Positiva S.A., solicitando la reactivación del pago de la prestación, la primera el 2 de febrero de 2011 y la segunda, el 14 de octubre de 2014, recibiendo en ambas ocasiones respuesta negativa, estimando este Colegiado que no es de recibo que para el año 2014, la entidad siguiera sosteniendo la incompatibilidad entre las prestaciones, cuando ya existían numerosos pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con más de 4 años de evolución, incluso en procesos en los cuales Positiva S.A., fungía como demandada, en los que claramente se estableció la compatibilidad de la pensión de invalidez de origen profesional con la pensión de vejez.

Aunado a ello, no puede pasarse por alto que la UGPP fue vinculada oficiosamente al proceso en audiencia pública realizada el 21 de junio de 2023, momento hasta el cual, la demanda solo estaba dirigida contra Positiva Compañía de Seguros S.A., y que el actor, no acreditó que hubiera elevado solicitud alguna ante la UGPP en busca de la reactivación de su prestación. Corolario de lo expuesto se revocará parcialmente el numeral noveno de la sentencia confutada, para en su lugar absolver a la UGPP de la condena en costas.

Costas en esta instancia a cargo del demandante y en favor de la UGPP, teniendo en cuenta la prosperidad del recurso del primero y la prosperidad del recurso de la segunda, se fijan como agencias en derecho, la suma de \$1.300.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral tercero de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2023 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Gabriel de Jesús Murillo García contra Positiva compañía de Seguros S.A., en el sentido de **CONDENAR** a la **UGPP**, a reconocer y pagar al actor la suma de **\$132.163.718**, por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez de origen profesional, causado entre el 24 de octubre de 2011 y el 30 de noviembre de 2023.

2.- Se **REVOCA PARCIALMENTE** el numeral noveno del fallo confutado, para en su lugar, **ABSOLVER** a la UGPP, de la condena en costa impuesta en primera instancia.

3.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

4.- **COSTAS** en esta instancia a cargo del demandante y en favor de la UGPP, inclúyase como agencias en derecho, la suma de \$1.300.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

5.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



LUZ PATRICIA CALLE QUINTERO



DIEGO FERNANDO SALAS RONDON